



**JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).

| | |
|------------------|--|
| Ref. Proceso | 11001333501020220029500 |
| Medio de Control | CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O ACTOS ADMINISTRATIVOS |
| Accionante | IVÁN URREA VEGA |
| Accionado | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE OPERATIVA SIBATÉ |

A través de apoderado, el señor Iván Urrea Vega, en ejercicio de la acción de cumplimiento, presentó demanda contra la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca – Unidad Operativa Sibaté, el 12 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de los artículos 1º, 129 y 135 de la Ley 769 de 2002.

I. CONSIDERACIONES.

La solicitud presentada por el accionante refiere al ejercicio de la acción constitucional consagrada en el artículo 87 de la Carta Política el cual fue reglamentado por la Ley 393 de 1997.

Este medio de control es un mecanismo para que toda persona pueda *"acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido"*.

Respecto a la finalidad de la acción de cumplimiento, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:

*"(...) la acción de cumplimiento tiene como finalidad proporcionar a toda persona la oportunidad de exigir que las autoridades públicas y los particulares en ejercicio de funciones públicas, **cumplan el mandato de la ley o lo previsto en un acto administrativo**, a fin de que el contenido de éste o de aquélla tengan concreción en la realidad, todo lo cual supone la demostración del incumplimiento alegado por parte del demandante"*¹ (Negrillas fuera del texto original).

¹ Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de octubre 31 de 1997, Expediente ACU -033. Véase, entre otras: ACU -006, ACU -479, ACU -970.

- Entre otras, pueden consultarse las sentencias del 16 de abril de 1999, expediente ACU-683, del 29 de noviembre de 1999, expediente ACU-839, del 12 de marzo de 1999, expediente ACU-609, todas de la Sección Cuarta, del 28 de mayo de 1999, expediente ACU-839 de la Sección Tercera y del 21 de enero de 1999, expediente ACU-546 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Sin embargo, para que el medio de control de cumplimiento sea admitido, el artículo 10 de la Ley 393 de 1997, establece que la solicitud deberá contener:

“1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción.

2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia.

3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento.

4. Determinación de la autoridad o particular incumplido.

5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso segundo del artículo 8 de la presente Ley, y que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.

6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.

7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. (...)”

El artículo 8° de la Ley 393 de 1997 precisa que: *“con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud”*.

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado señaló que *“el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento²”*. En ese sentido, dicha Corporación no ha tenido como demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que *“la solicitud tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia”³*.

Así, la solicitud debe permitir determinar que lo pretendido por el interesado es el cumplimiento de un deber legal cuyo objetivo es el agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la constitución de la renuencia de la entidad demandada la cual debe ser acreditada con la demanda, so pena de ser rechazada de plano, conforme al artículo 12 de la Ley 393 de 1997.

Respecto a dicho requisito, el actor aduce como fundamento normativo que considera incumplidos por la parte demandada los artículos 1°, 129 y 135 de la Ley

² TORRES CUERVO, Mauricio. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia de octubre veinte (20) de dos mil once (2011). Expediente No. 2011-01063.

³ MORENO RUBIO, Carlos Enrique. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia de septiembre veintisiete (27) de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 68001-23-33-000-2018-00589-01(ACU).

769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio donde fue declarado responsable de la infracción asociada con la orden de comparendo No. 25740001000031129881.

Ahora bien, revisados los anexos allegados con la demanda se advierte que el demandante omitió aportar copia del escrito de constitución en renuencia, pues se limitó a remitir la constancia de radicación vía correo electrónico de la petición presentada ante la entidad accionada el 16 de abril de 2022⁴.

Aunado a lo anterior, en el acápite que denominó “PRUEBA DE LA RENUENCIA” indicó que, en la petición presentada ante la Secretaría de Transporte, solicitó la revocatoria directa de la resolución sancionatoria por el incumplimiento a las normas mencionadas, de lo cual es posible colegir que se trató de una petición regulada por el capítulo IX del Título I de la Ley 1437 de 2011, y que cumple unas finalidades diferentes respecto a la que concretamente hace mención el artículo 8° de la Ley 393 de 1997.

En ese orden de ideas, la petición a la que hace alusión el demandante no puede tenerse en cuenta para la constitución en renuencia de la entidad en contra de la cual se pretende ejercer el medio de control de la referencia, de una parte, por cuanto no existe certeza de si la misma se presentó con el objeto de agotar dicho requisito de procedibilidad, pues no fue aportada con la demanda y en los antecedentes se mencionó que la petición fue presentada con un propósito diferente.

Sumado a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que de la lectura del documento aportado como respuesta emitida por la autoridad accionada⁵, el 31 de mayo de 2022, a la petición No. 2022038482, advierte el Despacho que no corresponde a una petición de cumplimiento de normas con fuerza de ley, sino que pone en conocimiento información relacionada con una solicitud de acceso a las grabaciones de las audiencias celebradas dentro de la actuación contravencional y remite copia del acto administrativo mediante el cual se emitió decisión sobre la responsabilidad del accionante en el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 769 de 2002.

Así las cosas, el Despacho evidencia que no fue acreditado el debido agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción, previo la interposición de la acción de cumplimiento, motivo por el cual se procede al rechazo de plano de la demanda, conforme con lo señalado en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR la demanda promovida en el marco del presente medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos por **IVÁN URREA VEGA** contra la **SECRETARÍA DE**

⁴ Expediente electrónico archivo: 01DemandayAnexos pág. 10

⁵ Ibíd. Folios 11 a 16.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE OPERATIVA SIBATÉ, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Juan David Castilla Bahamón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.738.766 y T.P. No. 252414, para actuar en representación del accionante, en los términos del poder allegado con la demanda.

TERCERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones, una vez en firme la presente providencia y hechas las anotaciones de rigor en el software de gestión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **573a0a55551c92e5efbf958627f4e2df5740ab9f7f9dcbbcd9c57800ab23b7a3**

Documento generado en 16/08/2022 09:38:31 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>